



Asamblea General

Sexagésimo sexto período de sesiones

Documentos Oficiales

47^a sesión plenaria

Martes, 1 de noviembre de 2011, a las 15.00 horas

Nueva York

Presidente: Sr. Al-Nasser (Qatar)

*En ausencia del Presidente, el Sr. Thomson (Fiji),
Vicepresidente, ocupa la Presidencia.*

Se abre la sesión a las 15.10 horas.

Tema 115 del programa (continuación)

Nombramientos para llenar vacantes en órganos subsidiarios y otros nombramientos

g) Nombramiento de miembros de la Dependencia Común de Inspección

Nota del Secretario General (A/66/509)

El Presidente interino (habla en inglés): En una nota del Secretario General que se ha distribuido como documento A/66/509, se informa de la renuncia del Inspector Enrique Román-Morey del Perú, con efecto a partir del 31 de octubre de 2011. El Inspector Román-Morey había sido designado por la Asamblea General el 9 de octubre de 2007 para cumplir un mandato de cinco años, del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 4 del estatuto de la Dependencia Común de Inspección, el Presidente de la Dependencia notificó la vacante al Secretario General el 6 de septiembre junto con su decisión de no hacer valer el requisito del aviso con seis meses de anticipación estipulado en el párrafo 3 del artículo 4 del estatuto. A results de la renuncia del Inspector Enrique Román-Morey del Perú, la Asamblea General, en su sexagésimo sexto período de sesiones,

deberá designar a una persona para que llene dicha vacante en la Dependencia Común de Inspección.

En la nota del Secretario General también se señala que, para poder celebrar consultas como se estipula en el artículo 3, y hacer corresponder el período del mandato con el de los demás inspectores, tal vez la Asamblea desee examinar la posibilidad de llenar la vacante para un mandato que se extendería del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016.

En ese sentido, ¿puedo considerar que la Asamblea General desea llenar esta vacante para un mandato que se extienda del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016?

Así queda acordado.

El Presidente interino (habla en inglés): Como también se indica en el documento A/66/509, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 del estatuto de la Dependencia Común de Inspección, el Presidente de la Asamblea General celebrará consultas con los Estados Miembros para elaborar una lista de países, en este caso un país, al que se le solicitaría que proponga un candidato para su nombramiento a la Dependencia Común de Inspección.

Tras celebrar las consultas pertinentes, deseo comunicar a la Asamblea que cinco países de entre los Estados de América Latina y el Caribe —a saber, el Estado Plurinacional de Bolivia, Haití, Honduras,

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina U-506. Dichas correcciones se publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento separado.



México y el Perú— han decidido presentar sus candidaturas para una vacante.

Dado que, de entre los Estados de América Latina y el Caribe, no hay un solo candidato avalado para la vacante, de conformidad con la práctica anterior quisiera consultar con los Estados Miembros mediante el proceso de celebrar una votación consultiva secreta para seleccionar a un país del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, al que se le pedirá que presente un candidato para su nombramiento en la Dependencia Común de Inspección.

Aunque esta votación consultiva no sea una elección, procederemos de acuerdo con el reglamento de la Asamblea relativo a las elecciones. De no haber objeciones, ¿puedo considerar que la Asamblea General está de acuerdo con este procedimiento?

Así queda acordado.

El Presidente interino (habla en inglés): De conformidad con la práctica anterior, el país que reciba el mayor número de votos y no menos de la mayoría de votos de los presentes y votantes será el país seleccionado para que proponga un candidato para la Dependencia Común de Inspección.

También de conformidad con la práctica anterior, en caso de que, debido a un empate, sea preciso determinar el candidato que haya que elegir, se procederá a efectuar una votación especial, limitada a los candidatos que hayan obtenido el mismo número de votos.

¿Puedo considerar también que la Asamblea General está de acuerdo con ese procedimiento?

Así queda acordado.

El Presidente interino (habla en inglés): Quiero recordar a los miembros que en este momento la Asamblea no está nombrando a ningún miembro de la Dependencia Común de Inspección. Solamente está seleccionando un país, al que se le pedirá que proponga un candidato. Por lo tanto, en la cédula de votación deberá figurar solamente el nombre de un país y no el de una persona.

A continuación la Asamblea procederá a seleccionar un país de entre los Estados de América Latina y el Caribe, al que se le solicitará que proponga un candidato para llenar la vacante en la Dependencia Común de Inspección.

Antes de comenzar el proceso de votación, deseo recordar a los miembros que, de conformidad con el artículo 88 del reglamento de la Asamblea General, ningún representante podrá interrumpir la votación, salvo para plantear una cuestión de orden relativa a la forma en que se esté efectuando la votación.

Comenzaremos ahora el proceso de votación. Se ruega a los miembros que permanezcan en sus asientos hasta que se hayan recogido todas las cédulas de votación.

A continuación se distribuirán las cédulas de votación. Ruego a los representantes que escriban en las cédulas de votación el nombre de un Estado por el que deseen votar. Toda cédula de votación será declarada nula si en ella figura más de un nombre o bien el nombre de un Estado Miembro que no pertenezca a la región de América Latina y el Caribe. No se tendrán en cuenta las cédulas de votación en las que figure el nombre de una persona.

Por invitación del Presidente, la Sra. Anna Ruski (Bulgaria), el Sr. Juan Pablo Espinoza (Chile), la Sra. Anna Reich (Hungría), el Sr. Amin Javed Faizal (Maldivas), la Sra. Jamila Alaoui (Marruecos) y la Sra. Caroline Payne (Reino Unido) actúan como escrutadores.

Se procede a votación secreta.

Se suspende la sesión a las 15.25 horas y se reanuda a las 15.50 horas.

El Presidente interino (habla en inglés): El resultado de la votación es el siguiente:

<i>Estados de América Latina y el Caribe</i>	
Cédulas depositadas:	175
Cédulas nulas:	2
Cédulas válidas:	173
Abstenciones:	0
Número de miembros votantes:	173
Mayoría requerida:	87
Número de votos obtenidos:	
Honduras	107
Haití	26
Perú	17
México	12
Estado Plurinacional de Bolivia	11

Habiendo obtenido la mayoría requerida y el mayor número de votos, se elige a Honduras para

que proponga a un candidato para la Dependencia Común de Inspección.

El Presidente interino (*habla en inglés*): De conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 del estatuto de la Dependencia Común de Inspección, se solicitará a Honduras que presente el nombre de un candidato o una candidata y su curriculum vitae destacando las cualificaciones idóneas del candidato para las tareas previstas.

Deseo recordar a los miembros que, de conformidad con la resolución 59/267, de 23 de diciembre de 2004, el candidato debe tener experiencia en al menos una de las siguientes esferas: la supervisión, la auditoría, la inspección, la investigación, las finanzas, la evaluación de proyectos, la evaluación de programas, la gestión de recursos humanos, la gestión, la administración pública, la vigilancia y/o el desempeño de programas, así como conocimientos sobre el sistema de las Naciones Unidas y su papel en las relaciones internacionales.

Después de celebrar las consultas apropiadas descritas en el párrafo 2 del artículo 3 del estatuto de la Dependencia Común de Inspección, incluidas consultas con el Presidente del Consejo Económico y Social y con el Secretario General en su calidad de Presidente de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, el Presidente de la Asamblea General propondrá a la Asamblea el nombre del candidato que será designado como miembro de la Dependencia Común de Inspección.

Hemos concluido así esta etapa de nuestro examen del subtema g) del tema 115 del programa.

Tema 75 del programa (*continuación*)

Informe de la Corte Penal Internacional

Nota del Secretario General (A/66/309)

Informe del Secretario General (A/66/333)

El Presidente interino (*habla en inglés*): Como recordarán los miembros, la Asamblea General examinó este tema en su 44ª sesión plenaria, celebrada el 26 de octubre de 2011. Escucharemos ahora a los oradores restantes.

Sr. Silva (Brasil) (*habla en inglés*): Deseo sumarme a los demás oradores para dar las gracias al Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Sang-Hyun Song, por la declaración que formuló la

semana pasada (véase A/66/PV.44) y por la presentación del séptimo informe de la Corte a la Asamblea General (véase A/66/309). Lo felicito a él y a los demás magistrados de la Corte por su papel decisivo al contribuir al mantenimiento del estado de derecho y a la causa de la justicia. Nos enorgullece haber formado parte de este proceso mediante la labor de la Magistrada Sylvia Steiner, nacional del Brasil.

El Brasil asigna una gran importancia al desarrollo del derecho internacional estipulado en el Estatuto de Roma, por el que se estableció la primera corte permanente creada en virtud de tratados para enjuiciar a las personas acusadas de haber cometido los crímenes más graves que son motivo de preocupación para la comunidad internacional. La independencia de una institución judicial tan importante es la base de su legitimidad para presentar a los acusados ante la justicia, con equidad y pleno respeto de sus derechos. El Brasil considera que los valores consagrados en el preámbulo del Estatuto de Roma son de una índole verdaderamente universal. Es por ello que hemos apoyado siempre la universalidad de la Corte.

En ese sentido, observamos con satisfacción que, durante el período correspondiente al informe, Granada, la República de Moldova, Santa Lucía, Seychelles y Túnez depositaron sus instrumentos de ratificación o adhesión. Desde entonces, Túnez, Maldivas y Cabo Verde —que es miembro de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa— se han sumado a la Corte, con lo cual el número total de Estados partes en el Estatuto de Roma asciende a 119 países. Damos a todos ellos una cálida bienvenida. Esperamos ver un aumento del número de Estados, grandes y pequeños, de cada continente, que ratifiquen el Estatuto de Roma en un futuro cercano. Como es de conocimiento general, en Sudamérica todos los países son partes en la Corte Penal Internacional y respaldan firmemente la contribución de la Corte a la causa de la justicia internacional.

En el período que abarca el informe se demuestra que la Corte en la actualidad debe asumir un volumen de trabajo sin precedentes. La Corte está tramitando ahora siete situaciones pendientes, en vista del hecho de que la Sala de Cuestiones Preliminares III autorizó recientemente otra investigación. El número de personas sujetas a procedimientos ante la Corte aumentó de 15 a 25. En ese contexto, es importante dotar a la Corte de todos los medios necesarios para el cumplimiento oportuno de sus funciones judiciales.

El Brasil continúa recalcando la importancia de la cooperación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas. Concedemos una importancia especial a los esfuerzos encaminados a reforzar las actividades relativas al estado de derecho, tales como el apoyo a la creación de capacidad nacional de los Estados para el enjuiciamiento de los autores de crímenes graves. Los Estados tienen la responsabilidad soberana de hacer justicia y promover el cumplimiento de la ley. Deben recibir apoyo en sus intentos por fortalecer sus instituciones nacionales, para que la Corte funcione como tribunal de último recurso.

La próxima Asamblea de los Estados Partes estará particularmente atareada con vistas a las elecciones que se llevarán a cabo. En menos de dos meses esa Asamblea deberá elegir a seis nuevos magistrados y un nuevo fiscal. El Brasil les desea mucho éxito en el cumplimiento de sus deberes. Quisiera expresar una vez más el pleno apoyo del Brasil a la Corte Penal Internacional, y nuestro agradecimiento al Presidente Sang-Hyun Song.

Sr. Kamau (Kenya) (*habla en inglés*): Kenya hace suya la declaración formulada por el Representante Permanente de la República Unida de Tanzania en nombre de los Estados de África que son partes en el Estatuto de Roma.

Mi delegación agradece el informe de la Corte Penal Internacional sobre sus actividades durante el período 2010-2011 (véase A/66/309), en el que se destacan algunos de los acontecimientos ocurridos desde la presentación del informe anterior (véase A/65/313). Tomamos nota del aumento del volumen de trabajo de la Corte y de los retos consiguientes, que exigen redoblar esfuerzos para que la Corte pueda seguir cumpliendo eficazmente su mandato. Felicitamos al Presidente de la Corte, Magistrado Sang-Hyun Song, por su liderazgo al orientar a la Corte hacia la realización de los objetivos para los cuales fue establecida.

En ese sentido, Kenya estima que la Corte efectivamente ha asumido el importante papel de ayudar al mundo a luchar contra la impunidad de los autores de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

Kenya sigue comprometida a cumplir sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma y con arreglo al estado de derecho y la justicia natural. Además, el Gobierno de Kenya ha seguido cooperando

con la Corte, facilitando igualmente su labor. Hace poco la Corte estableció una oficina de enlace en Kenya, y el Gobierno ha concedido plenos privilegios e inmunidades diplomáticas a esa oficina, al igual que a sus funcionarios.

Naturalmente, al facilitar la labor de la Corte en Kenya somos profundamente conscientes de que es responsabilidad de Kenya ejercer su competencia penal sobre los autores de delitos cometidos en Kenya, incluidos los actos de violencia cometidos después de las elecciones de 2008. El Gobierno merece encomio por su avance en el proceso de investigación y enjuiciamiento de todos los presuntos responsables de participar en la violencia postelectoral. De hecho, en virtud de la nueva Constitución de Kenya, se han iniciado extensas reformas en el sistema de justicia para velar por una administración de justicia equitativa y transparente para todos. Entre algunas de esas reformas se incluye la designación de un nuevo procurador general de justicia, un fiscal general y un viceprocurador de justicia, al igual que los primeros magistrados que se hayan elegido para la Corte Suprema, 28 nuevos magistrados de la corte superior y un nuevo director de la fiscalía —todos los cuales han sido seleccionados mediante un proceso de contratación pública riguroso y transparente. Continúa la reestructuración sistemática del cuerpo de policía, que se establecerá en su forma definitiva de acuerdo con el proyecto de ley de 2011 sobre el servicio nacional de policía, una vez que esta ley sea promulgada.

Reviste igual importancia el hecho de que las instituciones políticas del poder ejecutivo y el Parlamento también serán objeto de una reestructuración con miras al mejoramiento de un entorno que resulte propicio para la administración de justicia y la protección de los derechos humanos.

Kenya se adhiere al estado de derecho a nivel nacional e internacional y considera que el Estatuto de Roma es un instrumento para seguir institucionalizando el estado de derecho y luchando contra la impunidad. Por consiguiente, alentamos a que se adhieran como Estados partes aquellos que no son partes en el Estatuto, en particular los Estados que son miembros del Consejo de Seguridad, órgano al que se encomendó la función de remitir causas de conformidad con los artículos 13 y 15 *ter* y aplazamientos de conformidad con el artículo 16 del Estatuto. De esa manera se verían obligados a regirse por los mismos principios que

aquellos sobre los que desean tener competencia y pronunciarse en el seno del Consejo de Seguridad. El imperativo moral de ese aspecto debería ser evidente, al igual que la correspondiente contradicción en términos de jurisprudencia.

Kenya se suma a los demás Estados Miembros para aplaudir a los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma desde la presentación del último informe, con lo cual el número asciende de 111 a 119.

La preservación de la confianza pública en cualquier sistema de justicia depende de la capacidad de ese sistema de defender el estado de derecho y los principios de la justicia natural. Esos son elementos fundamentales consagrados en el espíritu y la letra del Estatuto de Roma para velar por que no solo se haga justicia, sino que también se observe de manera manifiesta su cumplimiento efectivo.

Lamentablemente, hay una percepción creciente de que la Corte está señalando de manera injusta y selectiva a determinados países, particularmente en África. También existe la impresión de que la titularidad respecto del Estatuto de Roma ha sido usurpada, como sugiriendo que el Estatuto y la Corte están al servicio de algunos Estados y no de otros. Dichas percepciones redundan en menoscabo de una institución que fue creada con muy nobles intenciones y amenaza con socavar toda confianza en la Corte. Cuando combatimos la impunidad y promovemos el estado de derecho a nivel internacional no deberíamos reemplazar la impunidad en el plano nacional por la impunidad y la arbitrariedad en el plano internacional mediante una aplicación selectiva y sesgada de los principios y artículos del Estatuto de Roma. Por lo tanto, la Corte necesita preguntarse francamente por qué algunos Estados partes siguen descontentos y alienados en la Corte Penal Internacional. Ese proceso debería ir seguido de la instauración de medidas que garanticen el respeto del estado de derecho y de los principios de la justicia natural consagrados en el espíritu y la letra del Estatuto de Roma.

Permítaseme concluir manifestando que el entramado social de nuestro orden internacional se basa, entre otras cosas, en los principios de la soberanía y la igualdad de los Estados, en la inmunidad de los funcionarios en virtud del derecho internacional consuetudinario y en la coexistencia pacífica entre los Estados. Esos principios fundamentales no solo deben orientar la actuación de la Corte en relación con los

Estados, sino que deben guiar también el papel del Consejo de Seguridad, tal como se dispone en el Estatuto de Roma.

Al continuar el proceso de designar al próximo fiscal de la Corte, esperamos que trabaje con la Corte para velar por que esas conclusiones y doctrinas jurídicas fundamentales se respeten al aplicar el Estatuto de Roma.

Sr. Loy (Estados Unidos de América) (*habla en inglés*): Ante todo, deseo presentar las profundas condolencias de mi país al pueblo de Italia por el fallecimiento del Magistrado Antonio Cassese, eminente estudioso y jurista que aportó una contribución duradera al derecho penal internacional. Quisiéramos también dar las gracias al Presidente Sang-Hyun Song por su informe (véase A/66/333) y por su dedicación al servicio de la Corte Penal Internacional.

Si bien los Estados Unidos no son parte en el Estatuto de Roma, mantenemos un inquebrantable compromiso con la promoción del estado de derecho y con el principio de que quienes hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario deben rendir cuentas. Seguiremos desempeñando un papel de liderazgo para remediar las injusticias que se cometan y, de consuno con la comunidad internacional, continuaremos reaccionando ante las señales de alerta temprana para impedir que se cometan atrocidades en primer lugar. Reconocemos que la Corte Penal Internacional tiene la función fundamental de hacer que los autores de las peores atrocidades comparezcan ante la justicia.

Nos ha complacido emitir nuestro primer voto a favor de una remisión a la Corte por el Consejo de Seguridad este año, lo cual refleja nuestra continua colaboración con la Corte y los Estados partes en el Estatuto de Roma para poner fin a la impunidad por los crímenes más atroces. Al igual que trabajamos con los Estados partes sobre temas fundamentales, la administración del Presidente Obama también respalda el procesamiento en la Corte de causas que promuevan intereses y valores de los Estados Unidos coherentes con los requisitos de las leyes estadounidenses.

Continuamos propiciando iniciativas de complementariedad positivas asistiendo a los países en sus esfuerzos para desarrollar procesos de responsabilidad nacional por delitos previstos en el Estatuto de Roma. El objetivo de la Corte, por su

propia índole, es examinar solamente las causas de los acusados con la mayor responsabilidad por los crímenes más graves en su jurisdicción. Corresponde a los Estados complementar el trabajo de la Corte celebrando juicios a nivel nacional.

En ese sentido, durante el pasado año ayudamos al Gobierno de la República Democrática del Congo a redactar legislación por la que se establecen tribunales especiales mixtos. Seguiremos contribuyendo a fortalecer la capacidad e independencia del sistema judicial congoleño para que se haga justicia a las víctimas de la violencia sexual y otros crímenes graves. Prestamos apoyo a un proyecto piloto en la República Democrática del Congo para proteger a testigos y funcionarios judiciales en causas delicadas y difíciles, y estamos ampliando ese tipo de apoyo a la protección de testigos. Seguimos buscando otras maneras de ayudar en la celebración de juicios nacionales en otros países.

A pesar de la excelente labor realizada, aún quedan retos importantes que superar. En particular, es preciso resolver las carencias en relación con las reparaciones y una protección coordinada y eficaz de los testigos y los funcionarios judiciales. Por último, las reservas de mi delegación respecto de las enmiendas aprobadas el año pasado en Kampala son bien conocidas y fueron expuestas en el debate del año pasado sobre este tema del programa (véase A/65/PV.41, pág. 26).

Los Estados Unidos esperan seguir participando en calidad de observador en las sesiones de la Asamblea de los Estados Partes con ocasión del próximo período de sesiones que tendrá lugar en Nueva York en diciembre.

Sr. Delgado Sánchez (Cuba): La delegación de Cuba toma nota del informe del Secretario General que figura en el documento A/66/309. El establecimiento de una jurisdicción penal internacional imparcial, no selectiva, eficaz, justa, complementaria de los sistemas nacionales de justicia, verdaderamente independiente y, por tanto, exenta de subordinaciones a intereses políticos que puedan desvirtuar su esencia sigue siendo un objetivo que Cuba apoya.

Sin embargo, dadas las limitaciones en su independencia, la Corte Penal Internacional posee una falla de origen a partir de la forma en la que han quedado definidas sus relaciones con el Consejo de Seguridad. El artículo 16 del Estatuto de Roma otorga

al Consejo de Seguridad el poder de suspensión de las investigaciones o enjuiciamientos llevados a cabo por la Corte. Esta cuestión no quedó superada con los resultados de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, celebrada en Kampala en 2010.

La remisión del caso de Libia a la Corte Penal Internacional por el Consejo de Seguridad confirma una tendencia negativa que Cuba ha venido denunciando reiteradamente. El Consejo de Seguridad, violando los principios del derecho internacional y el derecho convencional de tratados, continúa remitiendo causas a la Corte Penal Internacional relativas a hechos y a ciudadanos de Estados que no son partes en el Estatuto de Roma.

Las propias resoluciones del Consejo de Seguridad evidencian el doble rasero político con el que opera dicho órgano, cuando en estas mismas resoluciones se estipula que los crímenes cometidos por las fuerzas de las Potencias que son miembros del Consejo de Seguridad y no son partes en el Estatuto de Roma quedarán excluidos de toda investigación. La Corte no puede ser un instrumento para atacar a los países en desarrollo y brindar impunidad a las agresiones de los países desarrollados.

Este actuar irresponsable del Consejo de Seguridad no solo afecta la supuesta imparcialidad e independencia que deben caracterizar a la Corte Penal Internacional, sino que también la amenaza con la ilegitimidad que caracteriza las decisiones antidemocráticas y poco representativas del Consejo de Seguridad. A este ritmo, pronto estaremos hablando no solo de reformar el Consejo de Seguridad, sino también la Corte Penal Internacional y su Estatuto.

Deseamos reiterar nuestra preocupación por el serio precedente que se crea con las decisiones de la Corte de iniciar procesos judiciales contra nacionales de Estados que no son partes en el Estatuto de Roma, que ni siquiera han aceptado la competencia de la Corte de conformidad con el artículo 12 de su Estatuto. La delegación de Cuba reitera que se debe respetar el principio de derecho relativo al consentimiento del Estado para obligarse por un tratado, lo cual queda refrendado en el artículo 11 de la parte II de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969.

La integridad de la Corte Penal Internacional como complemento de la jurisdicción criminal nacional tiene que ser preservada. La Corte debe mantenerse

imparcial y plenamente independiente de los órganos políticos de las Naciones Unidas, especialmente de aquellos que se caracterizan por ser antidemocráticos y poco transparentes en su labor. Esos órganos no deben impedir o afectar el funcionamiento de la Corte. Las responsabilidades del Consejo de Seguridad en virtud de la Carta no deben limitar el papel de la Corte como órgano judicial independiente.

Durante más de 50 años, Cuba ha experimentado disímiles formas de agresión como resultado de acciones unilaterales y extraterritoriales que nos han causado miles de muertos y lesionados e innumerables pérdidas materiales, económicas y financieras. La definición del crimen de agresión alcanzada en Kampala quedó por debajo de las expectativas de Cuba. Se perdió la oportunidad de establecer una definición genérica que abarcara todas las formas de agresión que se manifiestan en las relaciones internacionales entre los Estados y que no se limitan al uso de la fuerza armada, sino que afectan igualmente la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados.

Finalmente, reafirmamos nuestra voluntad de contribuir a la aplicación de una justicia penal internacional verdaderamente imparcial, con apego a las normas del derecho internacional y, en particular, a la Carta de las Naciones Unidas.

Sr. Ulibarri (Costa Rica): Costa Rica agradece el detallado y preciso informe presentado por el Presidente de la Corte Penal Internacional, Magistrado Sang-Hyun Song, cuyo liderazgo y visión reconocemos (véase A/66/309). Reiteramos nuestro respaldo a la Corte como un componente esencial en la arquitectura del derecho internacional y, particularmente, como institución indispensable para combatir la impunidad por los peores crímenes contra la humanidad.

Al aproximarse el décimo aniversario de la Corte el próximo año, nos complace que siga creciendo el número de Estados que se adhieren al Estatuto de Roma y lo ratifican.

En el informe del Presidente Song, que abarca el período comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de julio de 2011, se destaca la ratificación de cinco Estados durante ese período: Granada, Moldova, Santa Lucía, Seychelles y Túnez. Con posterioridad, Filipinas, Maldivas y Cabo Verde hicieron lo mismo. Damos la bienvenida a todos ellos y nos complace que ahora seamos 119 los Estados miembros de la Corte. Se

trata de una cifra estimulante, pero que a la vez revela el camino que aún deberemos recorrer hacia su universalización. Hacemos un llamamiento a los Estados que aún no son partes en el Estatuto de Roma para que se adhieran a él a la brevedad posible, como vía para reforzar e impulsar el carácter integral de la justicia internacional y, mediante ella, la paz y los derechos humanos.

Costa Rica desea referirse ahora a tres aspectos específicos de su particular interés en relación con la Corte.

En primer lugar, compartimos la preocupación del Presidente Song por la falta de cumplimiento por algunos Estados partes de las claras e irrenunciables responsabilidades que emanan del Estatuto de Roma. Resulta particularmente grave que tal incumplimiento se refleje en la negativa a ejecutar órdenes de captura vigentes. No hay razón jurídica válida para persistir en este tipo de conducta y, peor aún, en el desafío que implica recibir en el territorio de algún Estado parte a personas sobre las que pesan dichas órdenes.

Esperamos que el informe sobre posibles procedimientos de la Asamblea en relación con la no cooperación, aprobado unánimemente por la Mesa, contribuya a abordar este enorme desafío. Pero más importante aún es que los Estados comprendan plenamente sus responsabilidades y que aquellos que persisten en subordinar sus compromisos en virtud del Estatuto de Roma a otras consideraciones rectifiquen su actitud.

Una fuente adicional de preocupación es la situación financiera de la Corte y la posibilidad de que, por estrecheces presupuestarias, se vean amenazadas sus importantes tareas. La acción de la Corte ha crecido sustancialmente durante el período que abarca el informe, tal como se refleja en él, y continuará haciéndolo a futuro. Esto es consecuencia de la seriedad de las violaciones de los derechos humanos y la dignidad humana y del mayor reconocimiento del carácter primordial de la Corte.

No obstante, mientras sus tareas crecen, su presupuesto ha debido reducirse en términos reales, y algunos importantes Estados miembros han insistido en políticas indiscriminadas de crecimiento cero en las que no se tienen adecuadamente en cuenta las realidades internas de la Corte y sus desafíos externos.

Esperamos poder analizar este tema en la próxima Asamblea de los Estados Partes con serenidad, realismo, buena voluntad y la consideración de dos premisas esenciales: una debe ser la constante mejora de la eficacia y eficiencia del trabajo de la Corte; otra, el compromiso con la inversión en la justicia internacional, convencidos de que sus beneficios para la paz, la convivencia y la dignidad humana superan con creces sus costos.

El tercer elemento al que mi delegación desea referirse es la cooperación entre la Corte y las Naciones Unidas, que se sustenta en dos fuentes esenciales: el artículo 10 del Acuerdo de Relación entre ambas organizaciones, suscrito el 4 de octubre de 2004, y el artículo 13 del Estatuto de Roma, en relación con el ejercicio de competencias por el Consejo de Seguridad. Esta colaboración ha tenido un saludable desarrollo y ha redundado en logros tangibles para los dos órganos, que se vinculan en los objetivos centrales y comunes de promover la justicia internacional, la paz y los derechos humanos.

Sin embargo, es necesario señalar que toda remisión del Consejo a la Corte, importante como es, también implica la generación de obligaciones imprevistas. Lo justo es que los costos que emanen de ellas sean compensados por las Naciones Unidas, algo que hasta ahora no ha sucedido. También confiamos en que se logren acuerdos razonables en esta materia.

En la próxima Asamblea de los Estados Partes, que se celebrará en diciembre, elegiremos a seis magistrados y al sucesor o la sucesora del Fiscal. Será un momento crucial para el futuro de la Corte. Nuestro país está plenamente comprometido a ejercer con total responsabilidad y serenidad las responsabilidades que le corresponden de cara a estos procesos y hacia el trabajo de la Corte en general.

Valga este momento para reconocer también el liderazgo y la huella en la independencia de la organización del Fiscal Luis Moreno-Ocampo, así como del Presidente de la Asamblea de los Estados Partes, Embajador Christian Wenaweser, de Liechtenstein, quien también concluye sus tareas. Expresamos a ambos nuestro agradecimiento. Celebramos además que la Embajadora Tiina Intelmann, de Estonia, haya sido recomendada por la Mesa para ocupar la Presidencia de la Asamblea durante los próximos tres años.

Estamos convencidos de que, con el aporte de todos los Estados partes de las Naciones Unidas y de organizaciones responsables de la sociedad civil, nuestro avance en la dirección correcta logrará acelerarse aún más.

Sr. Troya (Ecuador): Permítaseme empezar mi intervención expresando el agradecimiento de la delegación del Ecuador por la presentación del séptimo informe anual sobre la labor de la Corte Penal Internacional (véase A/66/309), que hemos recibido de su Presidente. Este informe refleja el arduo trabajo de ese alto tribunal para combatir de manera firme la impunidad, que no puede admitirse ni siquiera en nombre de la paz.

Desde los inicios de la Corte Penal Internacional, el Ecuador ha sido un firme partidario de su creación y consolidación, y queremos aprovechar esta oportunidad para ratificar nuestro compromiso de trabajo por el fortalecimiento de la Corte y del Estatuto de Roma como únicos mecanismos para alcanzar la aplicación de un sistema de justicia penal internacional. Saludamos la incorporación de Maldivas, Filipinas, Cabo Verde, Granada, Moldova, Santa Lucía, Seychelles y Túnez al Estatuto de Roma, con lo cual somos ya 119 países los que reconocemos la jurisdicción de la Corte.

Tras los compromisos obtenidos en la Conferencia de Examen de Kampala, se ha logrado avanzar en varios temas primordiales para el fortalecimiento de la Corte. Conceptos fundamentales como la universalidad del Estatuto, la complementariedad y la cooperación entre los Estados y la Corte, así como el apoyo a las víctimas y a las comunidades afectadas, fueron objeto de análisis, con la decidida participación de la delegación de mi país, presente en dicha Conferencia.

No obstante, el Ecuador considera que todavía hay mucho camino por recorrer y tenemos aún trabajo por hacer en varios temas que son de particular importancia para mi delegación. En particular, mi delegación considera indispensable garantizar la independencia y la autonomía de la Corte, eliminando paulatinamente toda injerencia política que pudiera provenir de alguno de los órganos de las Naciones Unidas.

El consenso logrado en torno a la definición del crimen de agresión en la Conferencia de Kampala significó importantes sacrificios de delegaciones que,

como la ecuatoriana, aspiraban a obtener un artículo más claro y más duro que impidiera en el futuro el abuso de la fuerza militar y la violación evidente de la soberanía de los Estados. En tal virtud hacemos un llamado firme para que se hagan todos los esfuerzos necesarios para asegurar la plena vigencia de las disposiciones sobre dicho crimen el año 2017, sin dilaciones ni excusas.

Para el Ecuador la progresiva universalización del Estatuto de Roma y de la competencia de la Corte Penal Internacional es un objetivo irrenunciable. Más allá de consideraciones políticas coyunturales, es indispensable avanzar hacia la creación de una auténtica justicia penal internacional con jurisdicción para afrontar incluso los crímenes más horribles y para sancionar a los culpables indistintamente de su nacionalidad, posición o cargo.

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 80, consagra la imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión y nos encontramos actualmente adaptando varios cuerpos de la legislación nacional al texto y al espíritu del Estatuto de Roma, reforzando así la prohibición de los delitos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

Por otra parte, la reparación oportuna y adecuada a todas aquellas víctimas de los crímenes que están sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es un elemento sustancial a la justicia. En tal virtud, mi delegación saluda los esfuerzos realizados para fortalecer el Fondo Voluntario de Compensación a las Víctimas, así como la labor de varias entidades y gobiernos en este sentido.

Igualmente, la delegación del Ecuador respalda plenamente la labor de todos los grupos de trabajo y de manera especial el comité de selección del fiscal, cuya labor es fundamental para el futuro de la Corte.

El Gobierno del Ecuador ha apoyado permanentemente los esfuerzos que puedan realizarse para dotar a la Corte Penal Internacional con los fondos necesarios para su eficaz funcionamiento; es injustificable que tareas de indudable importancia como la protección a los testigos y a las víctimas e incluso la labor del Fiscal se encuentren en riesgo por la falta de fondos.

Nos encontramos a las puertas de un proceso de renovación que incluye a los distinguidos magistrados

de la Corte, al Fiscal, al Presidente y a la Mesa de la Asamblea de Estados Partes, todo lo cual forma parte de un ejercicio democrático enriquecedor y digno del mayor respaldo que mi país aplaude y sigue con particular atención.

Permítaseme concluir afirmando que la delegación del Ecuador se suma a los llamados a mantener y fortalecer una relación constructiva y eficaz entre la Corte y los diferentes órganos de la Organización de las Naciones Unidas. Nos encontramos empeñados en robustecer la institucionalidad de la Corte y concebimos este esfuerzo como una tarea conjunta en la que debemos participar de una manera constructiva para lograr las metas que nos hemos propuesto.

Sr. Falouh (República Árabe Siria) (*habla en árabe*): Mi país participó en la Conferencia de Roma que culminó con la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en 1998. También firmó el Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se concibió para poner fin a la impunidad de quienes hayan cometido los delitos que figuran en el Estatuto. En el preámbulo del Estatuto se reafirman

“los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.

En el preámbulo también se recalca que

“nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado”.

En el Estatuto de Roma también se reafirma que la jurisdicción de la Corte solo se puede invocar cuando el sistema judicial nacional no ejerce su jurisdicción. También se confirma que la jurisdicción principal y primaria del derecho nacional consiste en hacer justicia en su territorio y en causas que estén dentro de su jurisdicción y mandato.

Es realmente desconcertante que la noción de justicia penal internacional se esté utilizando como

pretexto para promover intereses políticos totalmente ajenos a las normas y reglas conocidas del derecho internacional y los propósitos y principios de las Naciones Unidas. También es lamentable que, en sus declaraciones, algunos países se refieran a mi país, Siria, utilizando esta tribuna, este tema y este órgano jurídico para tergiversar los hechos, lanzar acusaciones y presentar distorsiones y falsedades. Usan la ley o abusan de ella para ponerla al servicio de la política, en beneficio de su propia lógica, a fin de interferir en los asuntos internos de otros Estados.

No creo que las delegaciones que participaron en la Conferencia de Roma pensaran que en algún momento la ansiada codificación del derecho penal internacional se fuera a poner al servicio de intereses políticos. Creo que entonces ni se les ocurrió que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se fuera a utilizar un día como pretexto para derrocar regímenes o para interferir en los asuntos internos de los Estados. Ninguno de los juristas que participaron en la redacción del Estatuto jamás pensó que la idea de la definición del delito de agresión se diluiría hasta beneficiar al Estado agresor, ni tampoco se imaginó jamás que determinados Estados que cometen delitos que son competencia de la Corte estarían exentos de rendir cuentas o de recibir castigo y que se les pasarían por alto los delitos debido a consideraciones totalmente contrarias a los principios de la justicia y la igualdad.

Creíamos que la delegación australiana nos iba a hablar de las mujeres y los niños iraquíes que emigraron y cuyos cuerpos fueron devorados por tiburones, delante de la tripulación de los barcos australianos en el Mar de Java. Creíamos que nos iba a justificar la situación de miles de personas que están detenidas en campamentos, en barrios marginales de la costa septentrional de Australia, sin atención médica, por ser inmigrantes ilegales.

Mi país ha pasado por un período de disturbios. El tiempo de que dispongo aquí no me permitirá hablar de eso detalladamente. Mi país ha explicado anteriormente las circunstancias que rodean los disturbios, así como las medidas que el Gobierno sirio ha adoptado para restablecer la paz, la estabilidad y el estado de derecho en las zonas arrasadas por la agitación.

No obstante, quisiéramos reiterar una vez más que el Gobierno sirio habla en serio cuando se refiere a la aplicación de las reformas prometidas. De hecho, ya ha empezado a introducir reformas jurídicas, legislativas, judiciales, sociales y políticas. También quisiera insistir en que las autoridades sirias están asumiendo plenamente sus responsabilidades jurídicas y judiciales para aplicar la ley y llevar ante la justicia a toda persona que la incumpla, independientemente de su carácter o puesto.

La Comisión Judicial Independiente que se ha creado está desempeñando su mandato remitiendo al sistema judicial nacional a toda persona implicada en un acto ilegal, de manera que se puedan adoptar las medidas jurídicas pertinentes, velando a la vez por todos los derechos de los acusados y las víctimas en las distintas fases de los procedimientos judiciales.

Quisiera pedir sinceramente a todos que releen las disposiciones de la Carta y que reaviven el espíritu de esas disposiciones a fin de mejorar las relaciones entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

El Presidente interino (*habla en inglés*): Acabamos de escuchar al último orador del debate sobre el tema 75 del programa. La Asamblea General ha concluido así la presente etapa de su examen del tema 75 del programa.

Se levanta la sesión a las 16.40 horas.